



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

"B , Lidia Inés s/ causa nº 8403"
S.C. B. 719, L.XLV

S u p r e m a C o r t e :

I

La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal hizo lugar al recurso de casación deducido por la defensa de Lidia Inés B , declaró extinguida la acción penal por prescripción, y la sobreseyó en orden a la comisión de los delitos previstos en los artículos 106, segundo párrafo; 173, inciso 2º, y 174, inciso 2º, del Código Penal.

Para así decidir, los magistrados que conformaron la opinión mayoritaria consideraron que la duración del proceso resultó violatoria del derecho a ser juzgado en un plazo razonable (artículo 8, inciso 1º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Contra ese pronunciamiento, el representante del Ministerio Público Fiscal dedujo recurso extraordinario, en el que cuestionó la interpretación y aplicación que el *a quo* hizo de esa garantía.

En tal sentido, sostuvo que se omitió tomar en consideración el criterio expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo del caso "Cantos vs. Argentina", de 28 de noviembre de 2002, según el cual "Si la conducta procesal del propio interesado en obtener justicia ha contribuido en algún grado a prolongar indebidamente la duración del proceso, difícilmente se configura en cabeza del Estado una violación de la norma sobre plazo razonable".

Agregó que también la Corte Europea de Derechos Humanos, en las sentencias citadas por la Corte Interamericana en el caso "Cantos", ha reconocido que la multiplicidad de incidentes planteados por las partes pueden convertir un caso simple en complejo, y que pueden presentarse complicaciones que hagan más lento el proceso en los casos en que se requiere la opinión de expertos, como ocurrió en *sub lite*, en el que resultó ineludible la realización de exámenes periciales médicos y contables en razón de los hechos atribuidos a B , entre ellos el haberse aprovechado, en su condición de psicoterapeuta, de las necesidades, pasiones e inexperiencia de un paciente suyo, induciéndolo a

efectuar erogaciones a favor de ella y a suscribir diversos documentos en perjuicio de sus intereses patrimoniales.

Además, invocó las decisiones de ese tribunal europeo en los casos "Adiletti v. Italy" y "Kemmache v. France" (de 19 de febrero y 27 de noviembre de 1991, respectivamente), citadas por la Sala I de esa cámara al dictar sentencia en los autos "Chacón, Francisco Eduardo y otro s/ recurso de casación", el 5 de octubre de 2006, en tanto se consideró que no resultan imputables al Estado las demoras ocasionadas por el acusado que solicitó aplazamientos injustificados de audiencias, o no se presentó a aquellas a las que estaba debidamente citado.

Por otra parte, sostuvo que los votos que integraron la mayoría incurrieron en contradicción, desde que por un lado afirmaron la vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y, por el otro, destacaron que la dilación del proceso se debió en parte a la actuación de la defensa, calificada como "obstrucción deliberada del avance de la instrucción" por el juez que se pronunció en último término.

La denegación de esa apelación extraordinaria motivó la interposición de la presente queja.

II

A los argumentos desarrollados por el magistrado recurrente, a los que me remito y doy aquí por reproducidos en beneficio de la brevedad, estimo conveniente agregar algunas consideraciones sobre la arbitrariedad en que ha incurrido la Cámara Nacional de Casación Penal.

En ese sentido, aprecio que el juez que presidió el acuerdo expresó que el tiempo que insumió la tramitación del caso fue consecuencia de los errores y demoras en que incurrieron los órganos judiciales, pero omitió explicar por qué correspondería entender que las circunstancias en que apoyó esa afirmación generaron una dilación lesiva de aquel derecho.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

"B , Lidia Inés s/ causa n° 8403"
S.C. B. 719, L.XLV

En efecto, el magistrado formuló una imprecisa referencia al tiempo que demandó la realización del peritaje psicológico, señalando que cinco años después de iniciado el proceso la parte querellante propuso posponerlo para la etapa del debate oral. Sin embargo, considero que tal proceder no constituye, necesariamente, señal de tardanza en el trámite de la causa, y en el pronunciamiento no se precisó cuál fue la dilación que supuestamente habría generado esa medida de prueba, no se analizaron sus motivos, ni se expuso cuál habría sido la actuación estatal desplegada al respecto.

Asimismo, en dicho voto se sostuvo que a cinco años de iniciada la instrucción el agente fiscal solicitó que se ampliara la declaración indagatoria de la imputada, con el objeto de que se describiera de manera adecuada el hecho atribuido y, consiguientemente, se reformulara el auto de procesamiento. No obstante, advierto que toda esa actividad se habría desarrollado en sólo dos meses y ocho días (del 3 de octubre al 11 de diciembre de 2000), y en el fallo se omitió explicar de qué manera habría contribuido ese breve lapso a una supuesta afectación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, especialmente cuando estaba enderezado a brindar un mayor resguardo a otro derecho esencial del imputado como es el de defensa en juicio.

También, se invocó el lapso por el que se prolongó la clausura de la instrucción y la elevación de la causa a debate oral -entre el 2 de julio de 2001 y el 21 de septiembre de 2004-, y el tiempo que transcurrió entre el último ofrecimiento de prueba y el auto por el que se proveyó la instrucción suplementaria solicitada por las partes (1° de octubre de 2005 y 14 de diciembre de 2006, respectivamente), pero se omitió explicar por qué cabría entender que resultan lesivos de la garantía en análisis, así como relacionarlos y analizarlos en conjunto con las demás etapas y actos del proceso, lo que resultaba de especial significación teniendo en cuenta que, conforme manifestó el juez, "la actividad de la defensa (...) contribuyó a que el proceso se extendiera en demasía" (fs. 6, tercer párrafo).

Con este último parecer coincidió el otro juez que integró la mayoría. Cabe señalar, sin embargo, que la opinión de este último fue terminante, pues derechamente atribuyó a B y a su defensa la prolongación de la instrucción entre el llamado a prestar declaración indagatoria y los requerimientos de elevación a juicio de la parte querellante y el Ministerio Público Fiscal por considerar que provocó una obstaculización deliberada del avance del proceso -haciéndolo cargo, por consiguiente, de ciertos casos de dilación que el magistrado anterior, por el contrario, vinculó con la actuación de los órganos estatales-.

Respecto de este segundo voto, cabe destacar que, inmediatamente después de calificar en esos términos la actuación de la defensa, el juez dejó de apreciar la razonabilidad de la duración del proceso con los criterios expuestos por V. E. en diversos pronunciamientos (Fallos: 322:360, votos de los jueces Fayt y Bossert, y votos de los jueces Petracchi y Boggiano; 327:327; 330:3640) y se centró en las reglas de prescripción de la acción penal, concluyendo que ésta operó por haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 62, inciso 2º, del Código Penal con posterioridad al requerimiento de elevación a juicio formulado por la parte querellante.

Para sostener la prescripción de la acción penal, el magistrado expresó que los supuestos de interrupción previstos en el artículo 67 del código de fondo, deben ser analizados desde la óptica de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, para evitar que su aplicación literal pueda avalar la multiplicación de los plazos que establece el artículo 62 de ese ordenamiento. Al efecto -agregó- se debe recurrir a la legislación procesal en la materia, en cuanto reglamenta los plazos y términos del procedimiento y de los actos que lo integran, los que se ajustarán a la garantía en tanto sean realizados en el tiempo previsto para cada uno de ellos. Puntualizó que para el dictado del auto de citación a juicio y de la sentencia condenatoria, nunca podrán superarse los dos años, contados desde el primer llamado a prestar



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

"B , Lidia Inés s/ causa n° 8403"
S.C. B. 719, L.XLV

declaración indagatoria, por ser el plazo mínimo de los previstos en el citado artículo 62, y porque -a su juicio- resulta "prácticamente notorio, que la casi totalidad de los procesos concluyen o podrían haber concluido en una sentencia, no firme, en ese lapso". Señaló, finalmente, que conforme su interpretación los actos no pierden la "eficacia procesal", sino únicamente el efecto "sustancial" de provocar la interrupción de la prescripción de la acción penal, y que de otra manera se le estaría concediendo al Estado la posibilidad de purgar el tiempo transcurrido por su incuria y prolongar su potestad persecutoria, lo que configuraría una arbitrariedad.

En tales condiciones, el magistrado negó que en el *sub lite* el auto de citación a juicio del 21 de septiembre de 2004 haya tenido aptitud para interrumpir el curso de la prescripción de la acción, debido al lapso entre éste y el requerimiento formulado por la parte querellante el 28 de marzo de 2001, producto -en su opinión- de la anulación de un anterior auto de elevación a juicio, del 2 de julio de 2001, y de discrepancias entre los órganos jurisdiccionales intervinientes en torno a la oportunidad para resolver las excepciones opuestas por las partes.

Si bien la Corte ha establecido que lo relativo a la prescripción de la acción penal es materia ajena a la jurisdicción extraordinaria por versar esencialmente sobre temas de hecho y derecho procesal y común, tiene dicho también que cabe hacer excepción a ese principio cuando el pronunciamiento recurrido carece de fundamentación suficiente o luce en forma inequívoca un apartamiento de la solución normativa prevista por ley, todo ello incompatible con un acto jurisdiccional válido de acuerdo a la doctrina de la arbitrariedad de sentencias (330:4103; 328:3928; 327:2273).

A mi modo de ver, es lo que ocurre en el *sub examine*.

Así lo pienso, por cuanto advierto que el magistrado, para discernir acerca de la aplicación de la ley sustantiva, tomó en cuenta temas de índole ritual que aquélla no contempla, como son los relativos a los términos de los actos procesales, y tornó así inoperantes las

disposiciones de fondo (concretamente, el artículo 67, cuarto párrafo, inciso "d", del Código Penal).

Dicho razonamiento, en definitiva, condicionó la extensión de la acción penal a la observancia de los términos de cada uno de los actos procesales, dando lugar a una drástica reducción de la vigencia de la acción, que alteró la armonía con que el legislador combinó el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito y el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro (Fallos: 320:1717, considerando 9°).

A lo expuesto cabe agregar, como muestra del dogmatismo en que se incurrió, que el juez no sólo no aclaró cuál es a su entender el término en que, conforme las normas pertinentes del ordenamiento procesal, debería ser dictada la citación a juicio luego de requerida la elevación de la causa a la etapa de debate oral, sino que tampoco explicó por qué sería aplicable a ese acto procesal el límite de dos años -computados a partir del primer llamado a prestar declaración indagatoria- previsto en el Código Penal como el menor de los plazos de prescripción, para delitos distintos del que aquí se atribuye.

Carente de toda fundamentación también se encuentra la afirmación acerca de que todos los procesos, en la práctica, podrían concluir en dos años.

Lo mismo ocurre, a mi modo de ver, con la distinción que hizo entre la "eficacia procesal" y la "eficacia sustancial" del auto de citación a juicio pues, además de que no cuenta con base legal en los respectivos códigos, su aplicación en el *sub lite* llevó a sostener la irrazonabilidad del lapso entre dos actos del procedimiento, a pesar de que, conforme lo expresó la Corte con invocación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no existen plazos automáticos o absolutos, y la inobservancia de los términos de derecho interno no configura, por sí, una violación a la garantía en cuestión (Fallos: 322:360, considerando 13° del voto en disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano; 327:327).



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

"B , Lidia Inés s/ causa n° 8403"
S.C. B. 719, L.XLV

Esas falencias no resultan subsanadas, en mi opinión, por la afirmación que se formuló en el final del voto, según la cual "la duración del presente proceso desde 1995 hasta hoy resulta, en sí, violatoria del derecho del imputado a ser oído judicialmente en un plazo razonable", desde que no cuenta con la mínima fundamentación y resulta contradictoria con los argumentos sostenidos antes respecto de la actividad dilatoria de la defensa.

III

Por otra parte, no puedo dejar de señalar, a partir del análisis precedente, que los votos de los jueces que postularon la solución expresada en la parte dispositiva de la sentencia se apoyaron en fundamentos que no resultan coincidentes, lo que constituye otra causal de invalidez del pronunciamiento (confr. Fallos: 321:1653 y sus citas; 329:4078).

IV

Por todo lo expuesto, y los demás fundamentos del Fiscal General, mantengo esta queja.

Buenos Aires *15* de diciembre de 2009.

ES COPIA

EDUARDO EZEQUIEL CASAL